

Esta crisis como problema sistémico

The current crisis as a systemic problem

Albert Recio Andreu
Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de recepción: 05.03.2013

Fecha de aceptación: 24.04.2013

RESUMEN

En este artículo se trata de hallar explicaciones que ayuden a entender la gravedad y duración de la crisis actual. Para ello se analizan las causas de la misma y las políticas adoptadas frente a ella. Se sostiene que la crisis actual es en gran medida un reflejo de las fallas sistémicas de la economía mundial provocadas en gran parte por la persistencia de las políticas neoliberales. Las respuestas adoptadas, lejos de alterar esta orientación, han supuesto una profundización de las mismas políticas. En ello ha tenido un papel fundamental la hegemonía ejercida por las élites capitalistas a la hora de imponer sus intereses. Se analizan los mecanismos por los cuales se ejerce esta hegemonía, en particular el de las ideologías preponderantes en los teóricos y gestores de la economía y el del diseño de la Unión Europea. En la última parte del artículo se advierte de la importancia de las cuestiones ecológicas, otro problema sistémico ignorado en la mayoría de debates sobre las propuestas de salida de la crisis, y se aborda la necesidad de elaborar una respuesta sistémica.

PALABRAS CLAVE: crisis económica, neoliberalismo, ideologías económicas, Unión Europea, crisis ecológica.

ABSTRACT

This article seeks to find explanations that help to understand the gravity and duration of the current crisis. It analyzes the crisis' causes and the policies adopted against it. It is maintained that the current crisis is for the most part a reflection of the systemic faults of the global economy provoked mainly by the persistence of neoliberal policies. The adopted answers, far from changing this orientation, have meant the deepening of the same policies. In this context the capitalist elites had a relevant role to impose the hegemony of their interests. The mechanisms that apply to this hegemony are analyzed, in particular those from the preponderant ideologies in the theorists and consultants of the economy and the European Union design. The last part of the article warns about the importance of ecological issues, another systemic problem that is ignored in most of the debates about the proposals to end the crisis, and approaches the need to elaborate a systemic answer.

KEY WORDS: economic crisis, neoliberalism, economic ideologies, European Union, ecological crisis.

La crisis económica que estalló en 2008 ha generado una sucesión de procesos que la han convertido en una situación de estancamiento económico de largo alcance y, sobre todo, están generando un grado de sufrimiento social insoportable. Como ocurrió en otras ocasiones (el *crash* de 1929 o el aumento del precio del petróleo de 1973) lo que se presentó como una situación coyuntural se transformó en una dinámica de grandes dimensiones y de largo alcance. Entre otras cosas puso de manifiesto lo inadecuado de los sistemas de previsión económica, obligados periódicamente a revisar unas previsiones de recuperación que acaban mostrándose inadecuadas. Y nadie parece tener una idea clara de cuáles son las políticas que ayudarían a sacar a los países del marasmo.

En anteriores trabajos (Recio Andreu, 2009, 2010) traté de explicar cuáles eran las causas estructurales que habían provocado la crisis y cuáles eran las razones que podían explicar la particular situación de nuestro país. En el presente trabajo trataré de continuar esta línea argumental con el objeto de situar las razones que explican las medidas adoptadas frente a la crisis, su incapacidad para encontrar soluciones a corto y medio plazo, las razones que explican la persistencia de unas estructuras que no pueden sino generar problemas.

1. La naturaleza de la crisis actual

Hay pocas dudas del papel desempeñado por el sistema financiero internacional en el desencadenamiento de la crisis. El papel del sector financiero como un elemento desestabilizador del funcionamiento de las economías capitalistas se conoce desde hace muchos años (Kindleberger, 1978; Minsky, 1986; Keen, 2001). De hecho, la crisis financiera de 2008 vino precedida por una cadena de graves incidentes financieros desde al menos 1987, cuando tuvo lugar el derrumbe de la bolsa de Nueva York. A pesar de ello, aquel incidente (y otros del mismo tipo como el hundimiento de las liberalizadas cajas de ahorro estadounidenses) lejos de provocar una revisión del sistema financiero fue seguido por una continuidad de políticas liberalizadoras de la actividad financiera. Unas medidas liberalizadoras que abarcaban una enorme variedad de campos: libertad de movimientos internacionales de capitales, liberalización de las barreras que limitaban el campo de acción de cada institución financiera, apertura a la creación de todo tipo de activos ficticios y subsiguiente liberalización del mercado bursátil, posibilidades de creación de nuevas instituciones financieras (por ejemplo los *hedge funds*), autonomía de los bancos centrales respecto a los gobiernos (en la práctica dejar que el sector se autorregulara). En definitiva un conjunto de medidas que favoreció la creación de grandes conglomerados financieros internacionales, que facilitó el endeudamiento masivo, que permitía diluir el riesgo financiero y que en conjunto impulsó un crecimiento desmedido del sector financiero. Lo que hoy conocemos como financiarización de la economía tiene su fundamento en esta liberalización y autonomización del sistema financiero, aunque su alcance es mucho mayor. El enorme desarrollo y desregulación de la actividad financiera ha fomentado una orientación especulativa en el conjunto del sistema, en parte endógena al sistema financiero. Parte de la desregulación ha consistido en la legitimación de los abusivos esquemas de incentivos (especialmente favorables a los altos directivos, pero aplicados también a los empleados medios) que están en la base de muchas de las operaciones de alto riesgo y opacidad que han provocado la sucesión de “accidentes” que han salpicado la historia financiera de los últimos años. En parte exógena, puesto que la busca de rentabilidad a corto plazo ha acabado por contaminar las prácticas de la mayor parte de las empresas, especialmente de las de mayor tamaño, lo que ha generado una orientación financiera de su funcionamiento

y una mucho menor orientación para el desarrollo equilibrado de las empresas (Alonso y Fernández Rodríguez, 2012). Los *holdings* de capital riesgo, dedicados a comprar y vender empresas con operaciones de corta duración, ejemplifican este modelo de gestión empresarial que se ha ido desarrollando en las últimas décadas. La desregulación financiera ha servido además como instrumento facilitador de movimientos de capitales que afectan a las bases de las políticas fiscales nacionales y favorecen en definitiva la evasión fiscal de la gente rica.

El papel de la financiarización al promover un capitalismo especulativo sin control real es sin duda el principal responsable de los dos elementos que coinciden en el estallido de la crisis: la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria. Aunque esta última habitualmente se asocia al juego de otros agentes –los promotores inmobiliarios y los gobiernos facilitadores de la expansión urbana– es imposible entenderla sin el juego del sector financiero. Ello se explica por el doble papel de prestamistas a los oferentes y demandantes de viviendas (Keen, 2012). Si hay un sector donde oferta y demanda dependen crucialmente del crédito, este es el sector inmobiliario. Sin generosos créditos por parte de los bancos hubiera sido imposible el enorme apalancamiento de los grandes promotores inmobiliarios (muchos de ellos surgidos de la nada al inicio de la expansión), sin facilidades hipotecarias el mercado se hubiera colapsado mucho antes. El desregulado sistema financiero provocó el extremo endeudamiento que a la postre dio lugar al estallido de la crisis financiera.

Pero limitar la crisis al papel del sistema financiero conlleva ignorar otros aspectos estructurales de la economía actual que subyacen a los problemas económicos actuales y que confluyen e interaccionan con el sistema financiero en agravar la situación e impedir soluciones rápidas. La financiarización económica es una parte de un proceso de transformación más amplio de las economías capitalistas desarrollado al calor de la crisis de los años setenta del pasado siglo y que caracteriza la época neoliberal.

En primer lugar destaca el proceso de la globalización económica, ligado a una elevada liberalización de los intercambios comerciales, la deslocalización de muchas actividades productivas (especialmente las industriales) y la creación de nuevas estructuras políticas de regulación comercial (especialmente la creación de la Unión Europea y especialmente del área Euro). El resultado de todo ello se han traducido en la aparición de persistentes desequilibrios comerciales entre territorios, un resultado en gran medida no previsto por la teoría del comercio internacional que ha sido la justificación intelectual de la globalización. Estos desequilibrios comerciales que han provocado la aparición de países con superávits persistentes y de otros sistemáticamente deficitarios no sólo se ha traducido en una enorme disparidad de situaciones locales (áreas industriales desertizadas por un lado, áreas de intensa producción global por el otro), sino que tienen su correlato en la esfera financiera. En gran medida, la financiarización ha sido favorecida por estos desequilibrios comerciales y a la vez los ha ayudado a reforzar al posibilitar fórmulas para la financiación de los compradores netos que ha impedido que el proceso se bloqueara automáticamente. Sin la masiva actividad de reciclaje de dólares que realiza el sistema financiero entre China y Estados Unidos, el comercio mundial se hubiera estancado antes de la crisis de 2008, de la misma forma que sin este sistema financiero no hubiera sido posible la larga fase de crecimiento de una economía sistemáticamente deficitaria como la española. El capital financiero no sólo ha sido el facilitador necesario de este proceso, también ha utilizado el mismo para profundizar su desregulación: la creación de derivados, por ejemplo, se justificó en primera instancia por la necesidad de desarrollar instrumentos para hacer frente al riesgo cambiario que genera el comercio con monedas distintas. De la misma forma que gran parte de la artificiosa arquitectura financiera actual se ha ido construyendo como parte de la financiación necesaria para el desarrollo del gran capital multinacional.

En segundo lugar está el cambio de las políticas orientadas a reducir y transformar la intervención pública (Harvey, 2005; Glyn, 2006; Duménil y Lévy, 2011). Lo que más claramente se asocia a las políticas neoliberales. En su conjunto, estas han consistido en una amalgama de políticas que tienen como nexo común el poner la intervención estatal bajo control del gran capital o, cuando menos, minimizar la capacidad de control público sobre las élites capitalistas. Un cambio que se manifestó en primer lugar en el cambio de orientación de las políticas macroeconómicas, minimizando el papel de la política fiscal como instrumento básico de intervención, desgajando del control democrático la política monetaria a la que se le concede el papel central en el diseño de las políticas, colocando al control de la inflación en el objetivo central de la política económica al tiempo que se minimizaba la importancia del desempleo. En paralelo, este cambio estuvo asociado a una continua insistencia en la necesidad de recortar el sector público, empezando por recortes de impuestos a los ricos (con el argumento de que excesivos impuestos desincentivan la inversión) y siguiendo por políticas de recorte del gasto público y privatizaciones. El resultado de esta erosión fiscal es conocido, los estados tienen menor capacidad financiera, dependen más del sector financiero. La combinación de desregulación financiera, globalización y políticas neoliberales agrava la situación al constituir una amenaza a las políticas públicas en forma de evasión masiva de capitales en el caso de que se tomen medidas que afecten a intereses capitalistas básicos. Y en tercer lugar la construcción asimétrica de un marco regulatorio internacional que en la práctica concede un enorme poder a los países más poderosos y a los grandes grupos financieros sobre las políticas nacionales de muchos estados.

Un elemento adicional de esta transformación fue la de un cambio radical en las políticas y las prácticas que afectan al trabajo. De hecho, todas las grandes transformaciones del capitalismo han tenido en la gestión laboral un elemento básico. El nacimiento de la era capitalista significó también el nacimiento de la organización fabril (espacio cerrado, reloj y supervisión directa) y la destrucción de los gremios medievales. La consolidación del capitalismo de la gran empresa a principios del siglo XX incluyó la introducción de las formas del taylorismo y el fordismo y la crisis del sindicalismo de oficio. La era keynesiana se basó en parte en una institucionalización del conflicto social y el reconocimiento de los sindicatos, como correspondía a un fase de capitalismo de concertación. El neoliberalismo constituye a este nivel una clara opción de desmantelamiento del pacto social keynesiano y una vuelta al capitalismo desencadenado. Ello ha tenido lugar tanto por la vía política – sucesivas reformas laborales orientadas a limitar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores– como por cambios sustanciales en la organización de la empresa y el trabajo (Recio Andreu, 2001). En gran medida, al igual que ocurre con la desregulación financiera, facilitados por el enorme avance que para el control de los comportamientos generan las nuevas tecnologías de la información. Pero también como producto de un aprendizaje organizativo y de utilización de las ventajas que ofrece el nuevo marco institucional.

Los cambios en las políticas públicas y laborales se han traducido, como previó en 1943 el agudo trabajo de M. Kalecki (1943), en una pérdida de poder de la democracia y la clase trabajadora frente al poder del capital. La traducción más simple de este cambio se encuentra en el evidente aumento de las desigualdades de renta y el reforzamiento de sectores empobrecidos en la mayoría de países desarrollados. Y, como sucede en la esfera internacional, el papel del sector financiero ha sido crucial para hacer posible un largo período donde el aumento de las desigualdades y la caída de rentas de amplios sectores de la sociedad han coincidido con una fuerte expansión del consumo y de la inversión inmobiliaria privada. Los sistemas de financiación del crédito al consumo y las hipotecas hicieron posible por un tiempo cuadrar el círculo, a costa de propiciar el sobreendeudamiento

de un sector de la población y acabar cooperando a hacer más expansiva la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Todo ello es bastante evidente. En el momento del *crash* teníamos un sistema financiero sobredimensionado y peligroso, estados con enormes desequilibrios comerciales, personas empobrecidas y endeudadas. La crisis parecía un buen momento para revisar lo ocurrido en las tres últimas décadas y proponer cambios sustanciales en la regulación de la economía. Esto es al fin y al cabo lo que se espera que ocurra en una situación tan desesperada como la vivida a finales de 2008. Sin embargo, hasta hoy las cosas han ido por otra vía y lo que trataré de explicar en las páginas siguientes es por qué ha ocurrido así. Porque la crisis del neoliberalismo no ha dado lugar a una revisión profunda de un marco regulatorio que propicia esta peligrosa inestabilidad y este elevado grado de desigualdades.

2. Una sucesión de políticas erróneas

Al estallar la crisis estuvo claro que el sistema financiero estaba en el centro del problema. En las semanas que siguieron a la quiebra de Lehman Brothers, cuando los grandes líderes empresariales estaban desconcertados y expuestos públicamente, de haber existido políticos audaces y con ideas claras se podría haber abordado una política de alto calado. Esto no fue así por múltiples motivos. No era un tema menor la estrecha relación existente entre los grandes grupos financieros y los responsables de las políticas económicas, aunque tampoco me parece menor la hegemonía cultural, en la academia y en los organismos reguladores, de la nueva economía neoclásica impuesta a partir de la década de 1970. No hubo ni ideas ni decisión. Tampoco una clara presión popular. Se acabó por adoptar una política de ayudas a las instituciones financieras en problemas y posponer las reformas para más adelante. Sin duda en política, como en otros muchos campos de la vida, los tiempos cuentan y en este caso la combinación de ayudas masivas a corto y un ritmo lento de reformas ha acabado por realimentar a los responsables del *crash* y diluir las regulaciones.

El argumento con el que se justificó tal acción era hartamente simplista. Refinanciando a los bancos se evitaba el colapso del sistema crediticio y con ello el de la economía real. Una versión particular de la tradicional teoría del *trickle down* aplicada al funcionamiento de las finanzas: el flujo de dinero concedido a los bancos se supone que fluirá hacia el resto de empresas y consumidores. En muchos casos este fluir no se ha producido por muchas y diversas razones: los bancos han usado prioritariamente el dinero para cubrir sus necesidades de pagos (muchos bancos, entre ellos los españoles, habían tomado créditos voluminosos que debían devolver en relativamente poco tiempo), los bancos podían utilizar el dinero para volver a las más rentables a corto plazo operaciones especulativas o colocarlas en títulos públicos de bajo riesgo. Los bancos además se volvieron mucho más exigentes a la hora de conceder créditos, tras haber experimentado el peligro de quiebra generado por la alegre política seguida en el período anterior. De alguna forma la ya expuesta “paradoja de la liquidez” tuvo sus efectos, como los había tenido en la época anterior en el caso japonés. Se han salvado los bancos sin que fluya la liquidez a las empresas industriales y de servicios. Y además los bancos han aprendido que si son muy grandes tienen elevadísimas posibilidades de forzar a los gobiernos a actuar en su favor. El sistema financiero está preparado para sus próximas burbujas y el mundo debe prepararse para los siguientes desbarajustes financieros.

El segundo error de apreciación fue el de valorar la crisis como una mera recesión temporal a la que se podía hacer frente con medidas de corto plazo y no entender que

los problemas estructurales antes comentados exigían medidas de más calado. En todo caso, en la primera fase la mayoría de gobiernos llevaron a cabo moderadas políticas expansivas en espera de tiempos mejores. Sin duda estas tuvieron un efecto paliativo de la crisis y, por mal diseñadas que estuvieran, jugaron un cierto papel anticíclico pero fueron insuficientes para hacer frente al derrumbe del sector inmobiliario, especialmente en aquellos países donde la burbuja había sido más sostenida (fundamentalmente el mundo anglosajón y España). Ello, unido a las restricciones crediticias al sector privado y a la caída de expectativas reales, provocó en bastantes países una caída de la actividad. Y en todo caso la combinación de caídas de la actividad privada y aumento del gasto público se tradujo en un aumento del endeudamiento público. Este en principio no es un problema grave, especialmente en períodos de crisis. Su gravedad depende en gran parte de cómo se valore tanto en dimensión como en su articulación en los modelos macroeconómicos. En muchos países, el desplome de los ingresos tenía además relación con las anteriores políticas de erosión fiscal generadas por la sucesión de recortes impositivos a las rentas del capital y los altos ingresos. Cuando aparecieron los déficits y aumentó el endeudamiento público (por asunción de deudas privadas o por el mero impacto del contexto macroeconómico), el sector financiero se encontró en condiciones de recuperar su posición de poder y trasladar la responsabilidad hacia los estados. A partir de este momento se ha generado una presión insoportable a favor de recortar gastos públicos y derechos sociales. Por otra parte el contexto del endeudamiento ha favorecido el rebrote de la especulación, especialmente en los mercados de la deuda pública. Ambas presiones han tenido hasta el momento tres efectos combinados: han propiciado recortes del gasto público que en muchos casos han vuelto a generar una segunda recesión (y en todos los casos la persistencia de un ambiente de atonía económica y de aumento del desempleo), en segundo lugar han legitimado reformas y políticas que favorecen los intereses de las élites económicas (privatizaciones, reformas laborales, etcétera), y en tercer lugar han bloqueado cualquier debate serio respecto a las transformaciones estructurales que deberían poner fin a la época neoliberal (Los economistas aterrados, 2012).

Cuando escribo estas líneas muchos países, especialmente europeos, han entrado de nuevo en recesión y el conjunto de la economía mundial muestra un grado de atonía tal que explica el preocupante aumento del paro. Ninguna de las recetas dominantes ha mostrado como resultado funcionar como se pretendía y los organismos económicos internacionales han vuelto a experimentar el mismo tipo de desconcierto que ya se vivió en la crisis de los 70: continuos cambios en las predicciones, informes contradictorios sobre las políticas, aunque persiste el dominio de las políticas neoliberales de proponer los ajustes estructurales, los recortes de gasto público y el reforzamiento de la libertad de capital. En el otro lado de la balanza, el aumento de las desigualdades y la inseguridad económica acompañan al desempleo como una plaga social.

El caso español resulta una muestra completa de toda esta sucesión de políticas erróneas. España había sido junto con Irlanda el gran campeón del crecimiento del empleo en toda la fase expansiva anterior. Las finanzas públicas, si nos atenemos a las dos variables de déficit y endeudamiento, mostraban unas cifras impecables desde una óptica ortodoxa. Incluso el sector financiero presumía de mantener unos niveles de regulación superiores al de otros países (una regulación nacida en la crisis financiera de los 80). Sólo el sector exterior presentaba un desequilibrio claro, pero esto situaba al país en la misma situación que los más poderosos Estados Unidos y Reino Unido. Cuando estalló la crisis financiera el Gobierno Zapatero minimizó los problemas, en parte por cálculo electoral pero mucho también por una lectura errónea de la situación. Los, en teoría, saneados sector público y financiero eran las razones que justificaban su optimismo, así como la confianza de estar ante

una recesión de duración limitada. Un diagnóstico que ignoraba la elevada dependencia del crecimiento español respecto al crecimiento inmobiliario, el carácter abrupto de los ajustes que caracterizan este sector, la elevada posición de riesgo de buena parte del sistema financiero. En resumidas cuentas, tantos años de hegemonía del pensamiento neoliberal (y de usar modelos econométricos que no contemplan la posibilidad de colapsos bruscos) hacían impensable el derrumbe agudo del empleo y la actividad que se produjo a partir de 2008. Una muestra ejemplar de cómo funcionan el multiplicador y el acelerador keynesianos cuando su signo es negativo. El colapso de la economía especulativa combinado con los intentos de política expansiva de 2009-2010 generaron un elevado déficit público. Las maniobras contables no pudieron evitar el hundimiento de los activos financieros y el crecimiento de la morosidad, lo que al final arrastró a una parte importante del sistema financiero español. Y esta crisis a su vez generó mayor endeudamiento público. Y abrió la nueva serie de reformas, recortes y privatizaciones que satisfacen las demandas de las mismas élites económicas que lideraron el antiguo “milagro especulativo”.

3. Las razones de las dinámicas: capitalismo, élites e ideologías económicas

Es evidente que hasta ahora las políticas llevadas a cabo no han resuelto los problemas que desveló el crac financiero de 2008. Incluso es posible que muchas de las acciones hayan contribuido, especialmente en Europa, a agravar la situación. Ello conduce a preguntarse cuáles son las razones que explican por qué las cosas han sido así. Mi primera valoración es que la vida económica y política funciona con unas inercias que hacen difíciles los cambios radicales, excepto cuando se trata de cambios que afectan a los sectores sociales con menor poder. Estas inercias derivan de la consistencia de las estructuras institucionales que se han consolidado en décadas pasadas y que tienden más a mantener el statu quo que a transformarlo.

Treinta años de neoliberalismo han generado un marco social e institucional que sigue determinando gran parte de las iniciativas políticas y respuestas sociales frente a la situación. El neoliberalismo representó en gran medida el abandono del capitalismo de pacto social de la posguerra y un reforzamiento de los poderes capitalistas tradicionales sobre la política y la sociedad. Fue en gran medida la respuesta que había previsto Kalecki a los dilemas que para las élites capitalistas generaban las políticas de pleno empleo. Él había sugerido que a medio plazo estas políticas podían llevar a una situación que sólo tenía dos salidas: o la creación de un nuevo modelo de sociedades poscapitalistas con un menor poder de la clase empresarial o el derribo de las políticas de pleno empleo y la vuelta a una gestión tradicional del capitalismo. El resultado de los dilemas planteados en la crisis de los setenta se decantó por esta segunda alternativa aunque esta no fue una simple vuelta al pasado. También en aquel caso las instituciones de la fase anterior, especialmente las que sostenían el estado de bienestar, modularon los ritmos y formas de aplicación en cada país y, en parte, permitieron sostener la imagen de que gran parte del viejo andamiaje de protección social estaba consolidado.

Esta consolidación incluye diferentes cuestiones. En primer lugar, un marco legal e institucional que ha consolidado el poder de las grandes empresas en la gestión de la actividad económica. Aunque resulta evidente que es el capital financiero el que está en la cúspide de este poder, no puede olvidarse, asimismo, el control de las grandes empresas sobre la mayor parte de actividades económicas relevantes, incluidas muchas de las que en el período anterior estaban desempeñadas por el Estado. Esta hegemonía, reforzada por las privatizaciones y la adopción de la lucha contra la inflación como el objetivo básico

de la política económica, han hecho casi desaparecer del debate político la posibilidad de resolver el problema del empleo por parte del sector público. Y mientras esta posibilidad no se contemple todas las políticas seguirán fundamentándose en crear un marco favorable a las empresas privadas como eje de creación del empleo y serán respetuosas con el sector financiero. Pero este control va más allá de su mera superioridad “cultural”, se sustenta también en la existencia de sólidos anclajes de los intereses privados en la configuración de las políticas públicas, los cuales funcionan por medio de mecanismos diversos –financiación a los partidos, *lobbies*, “puertas giratorias”, etcétera– que han convertido a las élites políticas en parte del bloque de poder del capital, en agentes de sus intereses. Lo que tiende a acotar el campo de las acciones consideradas aceptables.

Frente a este denso tejido de relaciones entre élites económicas y políticas se han debilitado, hasta casi disolverse, las fuerzas organizadas de los asalariados que en parte constituyeron la contraparte del pacto keynesiano. Esta disolución es en primer lugar el resultado de los propios cambios que han tenido lugar en las viejas economías capitalistas. En parte cambios legales en las regulaciones laborales orientadas claramente a diluir los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En parte generados por la emigración masiva de empleos industriales hacia los países en desarrollo. En parte la incidencia de las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo que han contribuido a fragmentar el colectivo obrero y a crear enormes dificultades a la acción colectiva. Es también sin duda una cuestión política que tiene dos componentes complementarios. De una parte, el fracaso de la experiencia soviética ha dejado al capitalismo sin un competidor serio. El que hoy la gran fábrica del mundo capitalista sea un país con un sistema político dictatorial controlado por una burocracia que se autoproclama comunista, además de un sarcasmo contribuye a generar más que escepticismo sobre las posibilidades de surgimiento de proyectos económicos poscapitalistas. De otra, la aceptación por parte de la socialdemocracia de las ideas básicas del credo neoliberal ha aumentado aún más si cabe la sensación de desamparo social de grandes masas de población, para las que, en lo fundamental, las élites políticas son vistas como una casta común. Sin ideas alternativas compartidas por millones de personas es difícil pensar que pueda haber una contestación de largo alcance y que se refuercen organizaciones de todo tipo que pugnen, más allá de la protesta puntual, con las políticas que se han ido adoptando y sean capaces de colocar otra agenda en la arena política.

En este desplazamiento a la derecha de las ideas económicas sin duda ha jugado una parte importante el fracaso soviético, el carácter dictatorial y represivo de estos regímenes burocráticos, su incapacidad para hacer frente adecuadamente a los problemas que, al menos en teoría, debería adelantar mejor una economía planificada que una de mercado competitivo, como es por ejemplo el medio ambiente. Pero esto es sólo una parte de la historia. En el otro lado de la balanza está la hegemonía cultural alcanzada por las teorías económicas conservadoras en la academia científica, las instituciones reguladoras y las burocracias públicas. Al fin y al cabo, los procesos de formación de las élites contribuyen poderosamente a consolidar el punto de vista con el que abordarán los problemas. La economía neoclásica se consolidó a principios del siglo XX como una disciplina “científica” que legitimaba el orden burgués, promovía el predominio de la propiedad capitalista y el mercado como forma superior de gestión de la sociedad humana. Su predominio sólo se vio fuertemente cuestionado tras la crisis de 1929 cuando el keynesianismo, y la realidad, pusieron en cuestión partes esenciales de su análisis. Después de la Segunda Guerra Mundial pareció que el keynesianismo se convertía en una nueva ortodoxia que alimentaba políticas de gestión pública de la economía y de cierto pacto social. Pero las cosas en realidad siempre fueron mucho más complejas. En el campo analítico se desarrolló una

importante contraofensiva que se pudo servir de las ambigüedades teóricas del propio Keynes y dio lugar a la llamada síntesis neoclásica, una teoría económica que presentaba las propuestas keynesianas como un caso particular de un modelo más amplio. Una síntesis keynesiana que fue asimismo puesta en cuestión por la potente contraofensiva conservadora que se produjo inicialmente en el mundo anglosajón a finales de los años sesenta y que dio lugar a una nueva macroeconomía que en cierta medida recuperaba las ideas de los viejos neoclásicos. Aunque en la academia económica han seguido existiendo críticos importantes en campos diversos, el poder de los renacidos neoclásicos ha sido fundamental sobre todo en la formación intelectual de las personas que trabajan en los puestos clave de la Administración y las instituciones internacionales. El mismo Stiglitz (2012), al que uno tendería a clasificar como un autor de síntesis neoclásica, reconoce este apabullante predominio de una ortodoxia que minimiza la importancia de los fallos de mercado y banaliza las críticas a los fallos del sistema. La potencia de esta teórica, avalada por el uso de un poderoso arsenal matemático, ha influido en gran parte de los cuadros de los partidos de izquierda e incluso ha llegado a contaminar la cultura de los dirigentes sindicales. Para muchos académicos y profesionales es difícil pensar en otros términos que los expresados en el credo neoliberal y ello genera un sesgo indudable en las propuestas de política económica.

4. La Unión Europea: neoliberalismo y espacio imperial

La crisis está afectando de forma más intensa a Europa, y especialmente a los países de su periferia: los del sur y el este, Irlanda. La explicación convencional es que ello se debe a fallos internos de sus políticas nacionales: corrupción, mala regulación de los mercados, mal diseño de las políticas, gasto público excesivo, etcétera. Estas cuestiones están sin duda presentes en muchos de los países con más problemas, pero tampoco puede olvidarse que algunos de ellos, especialmente España e Irlanda, eran antes del crac los países modelo en creación de empleo y buenos resultados macroeconómicos. Lo que de entrada puede considerarse un fallo de previsión por parte de los evaluadores comunitarios, como también vale para el caso griego: pocos meses antes de la entrada en circulación del euro, Grecia incumplía todas las condiciones impuestas y consiguió arreglar sus cuentas de forma “milagrosa” en pocos meses. Hay que ser muy ingenuos para pensar que los supervisores comunitarios fueron engañados por unos hábiles tramposos. Más bien lo que ocurrió es que había interés en incorporar a Grecia y se permitieron contabilidades creativas para justificar que era posible.

Pero esta visión que limita la causa de los problemas a la esfera local pierde de vista los elementos de la construcción europea que explican las dificultades que experimenta su periferia. En el modelo de construcción europea han jugado un papel crucial dos grandes cuestiones. De una parte el neoliberalismo como cultura económica general. La Unión Europea en general y el euro en particular se han ido construyendo en el período de predominio de la ideología neoliberal. Hay muchos elementos que indican la influencia de estas ideas en las estructuras europeas: la independencia del Banco Central Europeo (y su concentración en el problema de la inflación), el papel preponderante dado a la competencia (y que está siendo utilizado como un mecanismo para derogar no sólo regulaciones públicas locales sino especialmente las regulaciones laborales), las políticas de empleo centradas en la oferta de trabajo, la ausencia de un proyecto de estado europeo de bienestar y la marginación sistemática de las cuestiones sociales, la tolerancia con los paraísos fiscales internos (Luxemburgo, las diversas dependencias británicas)... A esta visión neoliberal se

le suma, o combina, otra de tipo nacional-imperialista. Para los países que constituyen el núcleo de la Unión, esta debe funcionar en beneficio de sus intereses nacionales y estos deben imponerse al resto de naciones de segunda fila. Destaca especialmente el papel de Alemania, pero no puede perderse de vista ni a Francia ni a Reino Unido (cuya no integración al euro es en gran medida resultado de su interés en mantener intacto el poder financiero de la City). Una predominancia que no sólo es visible en el trato desigual dado a Alemania y Francia cuando incumplían los criterios de déficit, sino que es claramente patente en la obsesión por el control de la inflación, la negativa a financiar a los estados vía Banco Central, el bloqueo a establecer marcos sociales comunes... La combinación de estas dos ideologías se ha mostrado en toda su profundidad en la gestión de la crisis actual y ha contribuido poderosamente a incrementar los problemas de las economías más débiles.

La Unión Europea partía ya de entrada con un diseño problemático. Se trataba de unificar espacios económicos diferentes en cuanto a especialización productiva, estructura empresarial, distribución de la renta, etcétera. De hecho podía esperarse que la eliminación de las fronteras económicas podía incluso contribuir a reforzar estas desigualdades. Especialmente si uno de los principales efectos de la unión era el de racionalizar los sistemas productivos globales y explotar el mecanismo de las economías de escala. Cualquier "racionalización" de los sistemas productivos se iba a traducir en el cierre de las plantas más obsoletas, más pequeñas o con mayores costes de transporte, lo que presumiblemente afectaría de manera desproporcionada a los países geográficamente periféricos y con plantas productivas de menor tamaño. En la década de 1980 los responsables de la Unión preveían que los menores salarios de estos países del sur serían un elemento crucial de atracción de inversiones que posiblemente compensaría con creces la destrucción de plantas obsoletas. Una previsión que por una parte exageraba el atractivo de los bajos salarios y por otra no contemplaba que el proceso de globalización en marcha aumentaría el número de países candidatos a ofrecer bajos salarios fuera de la Unión. De hecho no hay ninguna evidencia empírica que muestre que el desarrollo capitalista tienda a generar equilibrios territoriales automáticos. Todos los estados de un cierto tamaño experimentan un notable grado de divergencias regionales. La única fórmula de mantener un cierto grado de cohesión interna y de estabilidad es mediante la existencia de mecanismos redistributivos que garantizan ingresos y nivel de vida adecuado a las áreas y sectores sociales más desfavorecidos. En la construcción europea han faltado tanto una visión reequilibradora vía políticas sociales, como la existencia de un verdadero estado de bienestar europeo capaz de contrapesar las dinámicas de la racionalización productiva.

La creación del euro no ha hecho sino aumentar la dureza de estos problemas. Al establecerse un solo tipo de cambio para una amplia zona con diferencias productivas importantes se han generado nuevas dinámicas perversas. De una parte el tipo de cambio único, a menudo sobrevalorado, tiene efectos asimétricos según cual sea la composición y característica de los bienes y servicios que se importan. Para países productores de bienes especializados, de baja elasticidad precio y alta estabilidad renta, un euro sobrevalorado puede tener un efecto positivo pues tiene un impacto negativo despreciable sobre las exportaciones y abarata las importaciones de materias primas y suministros. Para países de producciones medio-bajas, con mayor competencia internacional e importadores de bienes sofisticados, el balance puede ser el contrario: la sobrevaloración reduce sus posibilidades de exportación fuera de la zona Euro y encarece las importaciones. Este es uno de los problemas que han experimentado las economías del sur de Europa. Problemas agravados porque Alemania ha practicado una férrea política de control del gasto, vía reducción salarial, que ha reducido las posibilidades exportadoras de los países del sur. Por otra, cuando los problemas de balanza comercial han aparecido la moneda única ha impedido a los países

con problemas practicar un ajuste monetario (devaluación) menos doloroso y más eficaz que la reducción de costes salariales que están practicando y que no hace más que hundir su mercado interno. De hecho, si se analiza todo el período del euro, puede verse que los países europeos que no se sumaron al mismo han tenido mucha más flexibilidad a la hora de ajustar su balanza exterior.

El diseño del Banco Central Europeo (BCE) y el euro no sólo ha creado problemas en la situación comercial de estos países sino que ha tenido efectos macroeconómicos en otros campos. De una parte, al focalizar toda la intervención pública en el problema de la inflación y despreciar la importancia del desempleo se han reforzado las tendencias depresivas, como ocurrió con el alza de tipos de interés practicada por el BCE a principios de 2008. De otra, el asimétrico tratamiento del BCE respecto a los bancos y a los estados miembros ha colaborado sin duda a magnificar los problemas de la deuda de los países. De hecho, ha convertido un problema menor como era el de la deuda griega en un colosal problema de financiación de los estados endeudados. La imposición de políticas de austeridad ha acabado por generar el peor de los escenarios posibles: una recesión sin red en los países afectados y el destrozo de sus sistemas de bienestar. El peor problema es que se ha sometido a los gobiernos de estos estados a promover una reconversión industrial sin contar con los instrumentos necesarios para adoptarla. Alemania ha jugado con fuerza su papel de eje central de la construcción europea (algo que podemos tildar de neoimperialismo) basado en una concepción mercantilista de la economía (los países deben salirse exportando fuera, una propuesta que a escala global es imposible) y el bloqueo de cualquier intento de desarrollo de un sistema de bienestar europeo difícil de imponer a sus propios votantes. Por esto la imposición de estas políticas está acompañada de una persistente acusación de despilfarro y corrupción sobre los países afectados. Es evidente que estas existen y deben combatirse. Pero es igual de evidente que si países como España o Grecia hubieran tenido gobernantes sensatos y honestos, pero que se hubieran limitado a practicar las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea bajo la égida alemana, el resultado en términos de ajuste y empleo hubiera sido posiblemente parecido, pues el esquema en el que se fundamenta es completamente erróneo. Como muestra que al final la austeridad acaba por afectar a la actividad económica de los países que supuestamente se han aplicado en las políticas de austeridad y devaluación, es lo que tiene la interdependencia.

5. La cuestión ausente: el debate ambiental

Hay otras crisis solapadas. Los científicos naturales hace tiempo alertan de graves problemas ambientales que afectan a la especie humana: cambio climático, pico del petróleo, destrucción de la biodiversidad, desertización... Parecería razonable que ante el impacto previsible de estos problemas se empezaran a adoptar medidas para prevenirlos o darles respuesta. La cuestión clave sin embargo radica en que, a pesar que el medio natural constituye la base de la actividad económica, el funcionamiento de las economías capitalistas tiende a ignorar la importancia del medio natural.

Esta ignorancia del medio natural está fundamentada en dos cuestiones combinadas. De una parte la lógica del beneficio implica minimizar los costes que hay que pagar para producir un determinado bien. Esta lógica conduce a no tener en cuenta aquello que no se paga o a tratar de eludir siempre que se pueda el pago de los mismos. Por esto las economías capitalistas generan sistemáticamente unos elevados costes sociales en todos aquellos campos donde es posible practicar esta elusión. El beneficio privado se asienta, en parte, sobre costes sociales no pagados. Ello vale para el uso de bienes naturales y también

de personas. Los mismos esquemas teóricos que emplean los economistas convencionales toman como dados la tierra (el medio natural), la fuerza de trabajo y hasta las tecnologías. Como muchos de los efectos ambientales más perversos sólo se manifiestan a largo plazo, las empresas tienden a ignorarlos. Lo mismo ocurre con la fuerza de trabajo, se ignoran, por ejemplo los impactos de la actividad económica sobre la salud. La única forma de que las empresas capitalistas adopten medidas medioambientales y sociales realmente respetuosas es por medio de la presión externa del Estado y la sociedad, por medio de regulaciones a las que a menudo se oponen.

Además del coste que para las empresas supone internalizar estos efectos externos hay una segunda cuestión que explica su resistencia a considerar los impactos ambientales sistémicos. La empresa capitalista se desarrolla explotando un determinado nicho de mercado, ello supone casi siempre un aprendizaje específico en un área de actividad, una determinada tecnología, un determinado mercado. Mucho del cambio técnico es incremental (mejoras continuadas sobre lo ya conocido). Para la mayoría de empresas los cambios radicales en el consumo o la tecnología son a menudo desafíos difíciles de superar. La historia empresarial está llena de empresas que fueron exitosas en un momento y desaparecieron cuando cambió el contexto. Esta dificultad del cambio hace que las empresas tiendan a menudo a tratar de bloquear los cambios que afectan negativamente a su nicho de mercado. En una economía dominada con grandes empresas que movilizan recursos voluminosos, que tienen miles de empleados (directos o indirectos), que cuentan con una determinada imagen, es bastante factible que ante las demandas de cambio opten por lanzar campañas destinadas a impedirlo, desde acciones de *lobby* político, campañas publicitarias y de intoxicación de la opinión pública, incluido, hasta recordar el impacto que tendría para el empleo una determinada regulación. En los últimos años no han faltado este tipo de maniobras en temas como el del campo climático, la energía nuclear o el uso de transgénicos. El resultado ha sido a menudo el bloqueo, cuando no la paralización, de muchas iniciativas orientadas a desarrollar una economía sostenible en términos ambientales, a costa de empeorar las perspectivas a largo plazo de la humanidad.

Y a pesar de ello algo de los problemas medioambientales puede haber impactado sobre la economía convencional. La forma más fácil en la que los problemas ambientales influyen en el funcionamiento del mercado es el del encarecimiento de costes generado por los problemas de extracción o reproducción de un producto natural. El encarecimiento del petróleo, algunos metales y algunos alimentos puede estar reflejando algo de estos problemas (en el caso de los alimentos parte de la cuestión estriba en la desviación de parte de la producción de cereales desde la alimentación a la producción de biocombustibles). Una subida que tuvo lugar a finales del ciclo expansivo y que no ha experimentado un freno extraordinario a pesar del estancamiento de la economía mundial. Curiosamente esta tendencia inflacionista, derivada de los problemas en la esfera medioambiental, al combinarse con un diseño institucional que considera la inflación el enemigo número uno a combatir por parte de la política económica, justifica la adopción de políticas restrictivas que empeoran el problema del desempleo.

No pretendo explicar el desempleo por la crisis ambiental. Creo que ambas crisis, la ambiental y la económica, tienen tempos diferentes. Sólo expresar que, sin embargo, cuando se dan algunas relaciones, estas se combinan para generar respuestas peores, algo que puede alertar sobre la incapacidad de las instituciones actuales para dar buenas respuestas al cambio ambiental y para impedir que el mismo se traduzca en un nuevo desastre social. La crisis ambiental es una cuestión de suficiente calado para requerir respuestas urgentes y masivas. La incapacidad de llevarlas a cabo tiene en gran parte su origen en los

mismos elementos que explican el desencadenamiento de la crisis económica: un marco de organización social, de regulación institucional y de políticas inadecuado para hacerles frente. Porque donde se requiere cooperación, igualitarismo, democracia, cosmopolitismo y visión de largo plazo, lo que existe es el dominio de estructuras orientadas a generar la competencia individualista, las desigualdades, el poder de las élites (de capitalistas y tecnócratas), el nacionalismo con perspectiva imperial y la visión a corto plazo. Por esto, aunque los ritmos son distintos, la solución a la crisis ambiental y la económica requieren respuestas combinadas.

6. Conclusión: Un balance provisional

En el presente artículo he tratado de desarrollar una explicación de la presente crisis en la que se destacan los aspectos estructurales que han llevado a la misma, la inadecuación de las políticas de respuesta y los aspectos sociales y culturales que explican las mismas. El diagnóstico es sin duda pesimista, la densidad estructural del marco institucional generado en la fase neoliberal y el poder y la hegemonía cultural del capital han propiciado una respuesta a los problemas que lejos de solucionarlos los están convirtiendo en enfermedades endémicas de muchos países desfavorecidos. Se han roto las perspectivas de un capitalismo “de pacto social”. Treinta años de neoliberalismo ya tuvieron un impacto importante en el aumento de las desigualdades y la gestión de los problemas sociales. Ahora que la crisis ecológica planea como un nuevo desafío sistémico y apunta hacia la necesidad de un modelo social de vida más austera, cooperativa, igualitaria y reflexiva, las respuestas actuales a la crisis están minando buena parte de las instituciones y estructuras sociales que podrían ayudar a este cambio de ritmo. Las sociedades en general, las del sur de Europa en particular, se enfrentan a un reto enorme: el de revertir esta orientación al desastre social en un nuevo marco de instituciones, organización productiva y social capaz de encontrar salidas justas y viables a unos problemas generados por una minoría en detrimento del presente y el futuro de la mayoría social.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, L. E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. J. (eds.) (2012): *La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional*, Madrid, FUHEM y Libros de la Catarata.
- DUMÉNIL, G. y LÉVY, D. (2011): *The crisis of Neoliberalism*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- GLYN, A. (2006): *Capitalism Unleashed*, Oxford, Oxford University Press.
- HARVEY, D. (2005): *A brief History of Neocapitalism*, Oxford, Oxford University Press.
- KALECKI, M. (1943): “Political Aspects of Full Employment”, *Political Quarterly*, 14, 322-331 (hay versión española en *Revista de Economía Crítica*, 12, 2011, 214-222).
- KEEN, S. (2001): *Debunking Economics*, Annandale NSW, Pluto Press Australia.
- (2012): “Manifiesto del Observatorio de la Deuda (Debwatch Manifiesto)”, *Revista de Economía Crítica*, 13, 226-256.
- KINDLEBERGER, Ch. (1978): *Manias, panics and crashes. A History of Financial Crisis*, Hoboken NJ, John Wiley & Sons.
- LOS ECONOMISTAS ATERRADOS (2012): *Cambiar de Economía*, Madrid, FUHEM y Ediciones de la Catarata.

- MINSKY, H. (1986): *Stabilizing and Unstable Economy*, New Haven, Yale University Press.
- RECIO ANDREU, A. (2001): “Empresa red y relaciones laborales”, en Dubois, A., Milián, J. L. y Roca, J. (eds.), *Capitalismo, crisis y desigualdades*, Barcelona, Icaria.
- (2009): “La crisis del neoliberalismo”, *Revista de Economía Crítica*, 7, 96-117.
- (2010): “Capitalismo español: la inevitable crisis de un modelo insostenible”, *Revista de Economía Crítica*, 9, 198-222.
- STIGLITZ, J. E. (2012): *The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future*, Nueva York, W. W. Norton & Company.